

## RESOLUCION N. 01458

### “POR LA CUAL SE REVOCA EL AUTO No. 03215 DEL 09 DE JUNIO DE 2014 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

#### LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, el Decreto 01 de 1984, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto Distrital 175 del 04 de mayo de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01865 del 06 de julio de 2021 modificada por la Resolución No. 046 del 13 de enero de 2022 de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

#### CONSIDERANDO

##### I. ANTECEDENTES

Que, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, encontró mérito suficiente para dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental mediante el **Auto No. 7642 del 27 de diciembre de 2011**, en contra del señor **MARCO AURELIO BELLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19095868, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **INDUSTRIAS METAL MADERA ABP**, o quien haga sus veces, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a la norma ambiental, tal como es incumplimiento al artículo 66 del Decreto 1791 de 1996.

Que, el anterior acto administrativo quedo notificado personalmente el 26 de agosto de 2013, con constancia de ejecutoria del 27 de agosto de 2013, publicado en el boletín legal de la entidad el 06 de abril de 2015 y publicado al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios por medio del Radicado No. 2022EE94422 del 26 de abril de 2022.

Que, mediante **Auto No. 03215 del 09 de junio de 2014**, la Dirección de Control Ambiental de la SDA, formuló pliego de cargos en contra del señor **MARCO AURELIO BELLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19095868, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **INDUSTRIAS METAL MADERA ABP**, a título de dolo por no presentar el informe periódico de actualización del libro de operaciones desde septiembre de 2002, vulnerando presuntamente con esta conducta el artículo 66 del Decreto 1791 de 1996.

Que el anterior acto administrativo quedo notificado personalmente el 28 de abril de 2015, con constancia de ejecutoria del 29 de abril de 2015.

Que de conformidad con la información consignada en el Registro Único Empresarial y Social de las Cámaras de Comercio (RUES), se pudo establecer que el señor **MARCO AURELIO BELLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19095868, se encuentra registrado con la matrícula mercantil No. 976428 del 29 de febrero de 1991, actualmente activa, con última renovación el 12 de noviembre de 2020, con dirección comercial y fiscal en la Carrera 3 No. 12D-31 de la ciudad de Bogotá D.C. y correo electrónico [industriasmaderascnb@gmail.com](mailto:industriasmaderascnb@gmail.com) respectivamente, por lo que la notificación de este acto administrativo y demás diligencias dentro del proceso sancionatorio ambiental, se harán a las dirección anteriormente citada la cual reposa en el expediente **SDA-08-2010-2621**.

## II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

### ❖ RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS LEGALES

El régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso y el derecho a la defensa, en virtud del cual, *“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”* y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que, el debido proceso y el derecho a la defensa en Colombia son mecanismos que tiene todo ciudadano para defenderse de las acciones administrativas y judiciales de las diferentes entidades del Estado y privadas. Es considerado este derecho como parte esencial y fundamental del Estado Social de Derecho y de sostenimiento de la Democracia, porque impide las arbitrariedades de los gobernantes con los ciudadanos.

Que, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-025 de 2009 del 27 de enero de 2009 con ponencia del Dr. Rodrigo Escobar Gil, se refirió en cuanto al derecho de defensa en los siguientes términos:

*“Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto de las garantías procesales radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado.”*

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, esta administración debe buscar el cumplimiento de los fines estatales, en consecuencia, la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales, desarrollando los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que, los actos administrativos expedidos por la Secretaría Distrital de Ambiente gozan de presunción de legalidad, lo que significa que se encuentran ajustados a derecho, mientras que los jueces competentes no declaren lo contrario, en consecuencia, dichos actos empiezan a producir sus efectos, una vez se hayan expedido legalmente, sin necesidad de fallo judicial acerca de su legalidad.

Que la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 *“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA”*, en su artículo 308, consagró el régimen de transición y vigencia en los siguientes términos:

*“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.*

*Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.*

*Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior...”*

**El CPACA entró en vigencia el día 2 de Julio de 2012**, siendo aplicable a todos los procesos, demandas, trámites, procedimientos o actuaciones que se iniciaron con posterioridad a la referida fecha, estableciendo a su vez, que los que estuvieran en curso al momento de su entrada en vigencia, seguirían siendo surtidos conforme al régimen jurídico precedente.

Para el presente caso, las actuaciones administrativas que dieron origen al procedimiento administrativo sancionatorio iniciado mediante **Auto No. 7642 del 27 de diciembre de 2011**, se fundamentan en el incumplimiento por no presentar el informe periódico de actualización del libro de operaciones desde septiembre de 2002, vulnerando presuntamente con esta conducta el artículo 66 del Decreto 1791 de 1996, situación que fue evidenciada en el **Acta de Visita de Verificación de Industrias Forestales No. 376 del 20 de abril de 2010 y el Concepto Técnico No. 07446 del 05 de mayo de 2010**, previo a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, por tanto las actuaciones administrativas subsiguientes en aquellos aspectos en que sea procedente por remisión de la Ley 1333 de 2009 o en los aspectos no regulados por esta norma deben resolverse bajo los preceptos del **Código Contencioso Administrativo (Decreto - Ley 01 de 1984)**.

#### ❖ DE LA REVOCATORIA DIRECTA

La Constitución Política de Colombia en relación con la protección del ambiente establece que es deber de los nacionales y extranjeros acatar la Constitución y las Leyes, así como respetar y obedecer a las autoridades (Artículo 4); y como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (Artículo 8), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (Artículo 95. Literal 8), (Artículo 79) derecho a gozar de un ambiente sano y (Artículo 80) planificación de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, y así, garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, establece que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de la parte primera del código.

Teniendo en cuenta que el trámite de la revocatoria directa no se encuentra regulado en la Ley 1333 de 2009, se aplicará lo dispuesto en el Decreto 01 de 1984.

El artículo 69 del Decreto 01 de 1984 establece que los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley, cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él, o cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

*“**ARTÍCULO 69.** Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:*

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.**
- 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.**

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”. (Subrayado y con negrilla fuera de texto)

**ARTÍCULO 70. Improcedencia.** No podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa.

**ARTÍCULO 71. Oportunidad.** La revocación podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso-administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda.

**ARTÍCULO 72. Efectos.** Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso-administrativas, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo. Revocación de actos de carácter particular y concreto.

**ARTÍCULO 73. Revocación de actos de carácter particular y concreto.** Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales. Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión. Procedimiento para la revocación de actos de carácter particular y concreto”

En relación con la facultad de las autoridades administrativas para revocar sus propios actos, la Corte Constitucional en Sentencia C-095 del 18 de marzo de 1998, con ponencia del Magistrado Hernando Herrera Vergara, afirma:

*“Adicionalmente, la mencionada normatividad consagra la posibilidad de la revocatoria directa de los actos administrativos, según la cual los mismos funcionarios que los expidieron, o sus superiores inmediatos, pueden retirarlos del ordenamiento jurídico, de oficio o a solicitud de parte, en una forma de autocontrol que se le reconoce a la administración para dejar sin efectos jurídicos sus propias decisiones, en desarrollo del principio de economía de los trámites y actuaciones administrativas, cuando sea manifiesta su oposición al ordenamiento superior o a la ley, o no esté conforme con el interés público o social, o atenten contra él, o cause agravio injustificado a una persona.*

*Así las cosas, la figura de la revocatoria directa de un acto administrativo no forma parte de la vía gubernativa, ni constituye un recurso ordinario, se trata de una decisión soberana y unilateral de la administración en cumplimiento de un deber de revisión del Estado de*

*sus propios actos, que se sustenta en el principio de legalidad, y en los valores fundantes constitucionales a la libertad de los administrados y a la justicia, que le permite rectificar su actuación o decisión sin la necesidad de recurrir al conocimiento de los tribunales contencioso-administrativos. (...)*

*Uno de los caracteres propios del acto administrativo es su revocabilidad, que se traduce en la potestad de la administración para revisar y volver a decidir sobre las cuestiones o asuntos sobre los cuales ha adoptado una decisión invocando razones de legalidad o legitimidad, con miras asegurar el principio de legalidad, o la oportunidad, el mérito o conveniencia de la medida que garanticen la satisfacción y prevalencia del interés público o social.”*

De acuerdo con lo anterior, la revocatoria debe entenderse como un mecanismo directo de la administración para salvaguardar el ordenamiento jurídico y el interés legítimo de los administrados, actuando de manera oficiosa o a petición de parte.

El Estado, como ente del poder público de las relaciones en sociedad, no sólo establece los lineamientos y normas a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de establecer "seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de defensa" al ejercer su poder político, jurídico y legislativo.

La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido del Derecho que se entiende como certeza práctica del Derecho, y representa la seguridad de que se conoce o puede conocer lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno.

Tanto la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de defensa constituyen un cumulo de garantías entre otros, otorgados al individuo por el Estado, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto llegara a producirse, le serán asegurados por el mismo Estado su protección y reparación.

En resumen, el debido proceso, el derecho a la defensa y a la seguridad jurídica permiten la confianza y la garantía a todo individuo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos establecidos previamente y regulados por la ley.

Así las cosas, este Despacho considera pertinente analizar la procedencia de la figura de la revocatoria directa del **Auto No. 03215 del 09 de junio de 2014**, mediante el cual se formuló pliego de cargos en contra del señor **MARCO AURELIO BELLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19095868, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **INDUSTRIAS METAL MADERA ABP**, o quien haga sus veces, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a la norma ambiental, tal como es incumplimiento al artículo 66 del Decreto 1791 de 1996, frente a las causales establecidas por el artículo 69 del Decreto 01 de 02 de enero de 1984.

### III. DEL PROCEDIMIENTO – DE LA LEY 1333 DE 2009

Que, el procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia se encuentra regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Que, el artículo 1 de la citada Ley, establece respecto de la potestad sancionatoria en materia ambiental:

**“ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL.** *El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaesppn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.* (Subrayas y negrillas insertadas).

Que, la Ley 1333 de 2009, señala en su artículo 3, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993.

Que, a su vez, el artículo 5 ibídem, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Que, a su vez los artículos 18 y 19 de la norma ibídem establecen:

**“Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio.** *El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.*

**Artículo 19. Notificaciones.** *En las actuaciones sancionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del Código Contencioso Administrativo”.*

Que, aunado a lo anterior, el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 indica “...Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.”

#### IV. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA

Que por medio del Radicado No. 2010EE18021 del 04 de mayo de 2010, la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la SDA, solicito al señor **MARCO AURELIO BELLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19095868, el registro del libro de operaciones de la actividad que realiza en su establecimiento forestal denominado **INDUSTRIA METAL MADERA ABP**, ubicada en la Carrea 3 No. 15-41 de la Localidad de La Candelaria de esta ciudad, toda vez que, tiene como actividad principal la transformación de productos provenientes de la flora, en virtud del artículo 66 del Decreto 1791 de 1996.

Que por medio del **Concepto Técnico No. 07446 del 05 de mayo de 2010**, la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre de la SDA, realizó visita técnica el **20 de abril de 2010 (Acta de Visita de Verificación de Industrias Forestales No. 376)**, al establecimiento forestal ubicado en la Carrera 3 No. 15-41 de la Localidad de La Candelaria de esta ciudad, denominado **INDUSTRIAS METAL MADERA ABP**, de propiedad del señor **MARCO AURELIO BELLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19095868, como seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 66 del Decreto 1791 de 1996, referente al informe anual de actividades de la carpintería, el cual continua con dicha actividad forestal, en donde se evidenció que incumplió con la presentación del informe anual de actividades previsto en dicha norma, ya que no presento los informes periódico de actualización de libro de operaciones desde septiembre de 2002.

Que, tal y como ya se señaló en el acápite de los antecedentes, una vez valorada la información consignada en el anterior **Concepto Técnico No. 07446 del 05 de mayo de 2010**, la Dirección de Control Ambiental profirió el **Auto No. 7642 del 27 de diciembre de 2011**, en el cual ordenó la apertura de proceso sancionatorio en contra del señor **MARCO AURELIO BELLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19095868, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **INDUSTRIAS METAL MADERA ABP**.

Dicho lo anterior, la Dirección de Control Ambiental profirió el **Auto No. 03215 del 09 de junio de 2014**, con el cual se formuló pliego de cargos en contra del señor **MARCO AURELIO BELLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19095868, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **INDUSTRIAS METAL MADERA ABP**, a título de dolo por no presentar el informe periódico de actualización del libro de operaciones desde septiembre de 2002, vulnerando presuntamente con esta conducta el artículo 66 del Decreto 1791 de 1996, surtiéndose, las etapas procesales de notificación, comunicación y publicación de los anteriores actos administrativos conforme a derecho; sin embargo, se debe aclarar que la norma aplicable para el caso en concreto, una vez revisado el expediente **SDA-08-2010-2621** y, analizado jurídicamente las actuaciones allí desarrolladas hasta el momento, es posible observar que dichas actuaciones previamente surtidas dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, particularmente lo referente al **Auto de Formulación de Cargos No. 03215 del 09 de junio de 2014**, se desarrollaron con aplicación del procedimiento establecido en la Ley 1437 de 2011, esto en aquellos aspectos en que por remisión de la Ley 1333 de 2009 o en los aspectos no regulados



por esta norma; régimen procesal que como ya se estableció previamente no le es aplicable al presente proceso.

En este punto resulta importante resaltar que los procesos de notificación establecidos en ambas normas, contemplan figuras totalmente diferentes, pues mientras el Decreto 01 de 1984 únicamente contempla la notificación personal y por edicto, la Ley 1437 de 2011 incluye dentro de las nuevas figuras de notificación la de aviso y por correo electrónico, situación que se debe sanear procesalmente, sin desconocer que la notificación para el presente caso se dio personalmente, el cual está regulado por la norma especial – Ley 1333 de 2009 en su artículo 24, sin embargo, se desconoció el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo (Decreto - Ley 01 de 1984), el cual se le debe aplicar al caso en concreto.

Así las cosas, al proferirse el precitado acto administrativo en contra del señor **MARCO AURELIO BELLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19095868, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **INDUSTRIAS METAL MADERA ABP**, se desconoció el principio de legalidad y de debido proceso, lo que implica que no están sujetos al ordenamiento jurídico, al desconocerse el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo (Decreto - Ley 01 de 1984); razón por la cual es pertinente dar aplicación a lo establecido en la causal primera del artículo 69 de la norma en mención; es decir la causal referente a la oposición a la Constitución Política o a la Ley.

Por lo anterior, esta Secretaría procederá a revocar el **Acto Administrativo Auto de Formulación de Cargos No. 03215 del 09 de junio de 2014**, mediante el cual se formuló pliego de cargos contra el señor **MARCO AURELIO BELLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19095868, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **INDUSTRIAS METAL MADERA ABP**.

Es necesario precisar, que, si bien el legislador señaló que la revocatoria de actos administrativos de carácter particular y concreto requieren del consentimiento expreso y escrito del respectivo titular, dicha circunstancia busca proteger los derechos e intereses de quienes hayan sido favorecidos con los efectos derivados del acto administrativo que se pretende revocar.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la situación jurídica derivada de la expedición del **Acto Administrativo Auto de Formulación de Cargos No. 03215 del 09 de junio de 2014**, no reconoce derechos o favorece los intereses del investigado, por el contrario, el referido acto administrativo constituye un acto de reproche que en nada favorece los intereses del señor **MARCO AURELIO BELLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19095868, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **INDUSTRIAS METAL MADERA ABP** y en ese sentido resulta inane solicitar su autorización para la revocatoria del acto administrativo en comento.

Por otra parte, en relación con la figura de la revocatoria directa, procedente de oficio o a petición de parte, el profesor Jaime Orlando Santofimio en el Tratado de Derecho Administrativo, Pág 301. Cuarta edición, reimp: octubre de 2007 señala:

*“No obstante, en ambos se coincide en que la revocatoria es la perdida de vigencia de un acto administrativo en razón a la declaratoria hecha por el funcionario que lo profirió o su inmediato superior, con base en precisas causales fijadas en la Ley. Su fundamento es – ha dicho el Consejo de Estado- el de no “...permitir que continúe vigente y produzca efectos un acto contrario al orden jurídico o al interés público o social, es decir, el imperio del principio de legalidad y de la oportunidad y conveniencia de la Administración, entendida como servicio público y obrando en función de ese servicio”*

Dicho esto y por virtud de lo preceptuado por el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo (Decreto - Ley 01 de 1984); manifiesta que en el ejercicio y desenvolvimiento de la función administrativa debe fundarse entre otros, en los principios de igualdad, economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, buena fe y debido proceso, destacándose este último, como el conjunto de garantías que buscan asegurar a los investigados por la administración pública una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Lo cual genera de suyo que las actuaciones de las autoridades que detentan la función administrativa se encuentran circunscritas al orden constitucional y legal prestablecido, en aras de preservar las garantías que buscan proteger los derechos de quienes están involucrados en una relación o situación jurídica.

En relación con la aplicación de los principios rectores, cabe destacar lo indicado por la Corte Constitucional en Sentencia C-188 de 1999, expresó la Corte:

*“(...)... en la disposición impugnada se muestra con claridad el desconocimiento de los principios de igualdad, eficacia y celeridad, que deben presidir la función administrativa, según el artículo 209 Ibídem. El Estado, en sus relaciones con los particulares, no puede asumir legítimamente las conductas que censura y castiga si provienen de ellos. Si les exige puntualidad en el pago de sus obligaciones tributarias, y si tan duramente castiga el hecho de que no las cancelen a tiempo, elementales principios de justicia y equidad hacen imperativo que, correlativamente, su propio comportamiento en idénticas situaciones se ajuste a las exigencias que formula a los particulares (...).”*

Es así como se encuentra que el artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, de conformidad con el cual *“toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”* deben desarrollarse con respeto de las garantías inherentes al derecho fundamental del debido proceso. Al respecto la Honorable Corte Constitucional ha definido el derecho al debido proceso *“como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.”*

Lo anterior se refuerza aún más considerando que los procedimientos administrativos deben adelantarse en garantía de las debidas formas procesales y de los derechos de los administrados, de esta manera, la decisión unilateral de esta Autoridad de revocar la decisión contenida en el Auto objeto de revisión, al contrario de generar inseguridad, genera confianza en la actividad

administrativa, al regirse por el debido proceso que, por mandato del artículo 29 de la Constitución, debe regir en las actuaciones administrativas.

Habida consideración de lo expuesto y con base en los fundamentos de hecho y de derecho, mencionados de manera precedente, mediante el presente acto administrativo se procederá a revocar oficiosamente el **Auto No. 03215 del 09 de junio de 2014**, mediante el cual se formuló pliego de cargos en contra del señor **MARCO AURELIO BELLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19095868, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **INDUSTRIAS METAL MADERA ABP**, en los términos a puntualizar en la parte resolutive del presente acto administrativo.

## V. COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA

Que, a través del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, modificado por el acuerdo 546 de 2013, se transformó el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente –DAMA–, en la Secretaría Distrital de Ambiente, a la que se le asignó entre otras funciones, la de ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que corresponda a quien infrinja dichas normas.

Que, el artículo 5° del Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la función de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, numeral 2 de la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, proferida por la Secretaría Distrital de Ambiente, por medio de la cual, el Secretario Distrital de Ambiente, delega en el Director de Control Ambiental, entre otras funciones, la de:

*“2. Expedir los actos administrativos que aclaren, modifiquen, adicionen o revoquen los recursos y solicitudes de revocatoria directa, presentados contra los actos administrativos que decidan de fondo los procesos sancionatorios.”*

Que, en mérito de lo expuesto, la Dirección de Control Ambiental,

## RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO. - REVOCAR el Auto No. 03215 del 09 de junio de 2014**, por el cual se formuló pliego de cargos en contra del señor **MARCO AURELIO BELLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19095868, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **INDUSTRIAS METAL MADERA ABP**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor **MARCO AURELIO BELLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19095868, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **INDUSTRIAS METAL MADERA ABP**, ubicado en las siguientes direcciones: en la Carrea 3 No. 15-41 de la Localidad de La Candelaria y en la Carrera 3 No. 12D-31, ambas de esta ciudad, según lo evidenciado en el Registro Único Empresarial y Social de Cámara de Comercio (RUES), de conformidad con lo establecido en el artículo 43 y subsiguientes del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

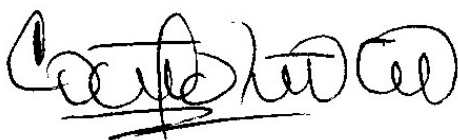
**ARTÍCULO TERCERO.** - Publicar la presente Resolución en el Boletín que para el efecto disponga la Entidad. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO CUARTO.** - Comunicar al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios el presente Acto Administrativo, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

**ARTÍCULO QUINTO.** - El expediente **SDA-08-2010-2621**, estará a disposición de la parte interesada en la oficina de expedientes de esta Secretaría de conformidad con lo preceptuado en el inciso 3 del artículo 29 del Código Contencioso Administrativo.

**ARTÍCULO SEXTO.** - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984.

**NOTIFÍQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE**  
**Dado en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de mayo del año 2022**



**CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR**  
**DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL**

Elaboró:

IVONNE ANDREA PEREZ MORALES

CPS:

CONTRATO 2022-0226  
DE 2022

FECHA EJECUCION:

28/04/2022

Revisó:

GIOVANNA DEL CARMEN FERNANDEZ  
ORJUELA

CPS: CONTRATO SDA-CPS-  
20220829 DE 2022

FECHA EJECUCION:

29/04/2022

**Aprobó:**  
**Firmó:**

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR

CPS: FUNCIONARIO

FECHA EJECUCION:

01/05/2022

**Exp. SDA-08-2010-2621**